

En este número destacamos:

Organizaciones de derechos humanos denuncian el uso de la violencia sexual contra mujeres y niñas rohinyas en Myanmar durante la operación militar de las fuerzas de seguridad

La Unión Africana presenta una nueva red de mujeres implicadas en la prevención de conflictos y la mediación

Organizaciones de mujeres reclaman mayor participación, protección de las mujeres defensoras de derechos humanos y esfuerzos en desarme, y denuncian la implementación fragmentaria de la 1325

Impacto de los conflictos

ARMENIA

Cientos de estudiantes armenios protestan en noviembre contra la nueva legislación sobre servicio militar y estatus del soldado, que establece restricciones para la obtención de prórrogas para la realización del servicio militar, poniendo de manifiesto los impactos de género de la militarización. El Parlamento armenio aprobó el 15 de noviembre con 86 votos a favor (sobre un total de 105) la nueva ley, que obliga a todos los estudiantes varones elegibles para obtener una prórroga del servicio militar a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa en que se estipulará su compromiso de realizar tres años de servicio militar tras la obtención de la licenciatura. Si no, serán reclutados a los 18 años para un periodo de dos años. Previo a esta nueva legislación, la edad de reclutamiento era también de 18 años, para un periodo de dos años, pero los estudiantes podían solicitar prórrogas, sin las restricciones de la nueva ley. Grupos de estudiantes se movilizaron entre el 7 y 15 de noviembre, paralizando algunas instituciones educativas y llevando a cabo una huelga de hambre de varios días. Algunos partidos de oposición y figuras públicas se sumaron a las críticas. Las protestas de los estudiantes

combinaban la crítica a la legislación por los impactos que puede tener en la continuidad de sus carreras educativas y estudios de postgrado, con la defensa del servicio militar obligatorio. En un intento fallido de diálogo con el Gobierno, los estudiantes propusieron llevar a cabo el servicio militar durante el transcurso de sus estudios. La tensión abierta en torno al servicio militar transcurre en un contexto de conflicto no resuelto en la región de Nagorno-Karabaj, que enfrenta a Armenia y Azerbaiyán en torno al estatus de esa región, catalizador de dinámicas de militarización política y social. Al mismo tiempo, el conflicto acumula víctimas mortales militares –incluyendo de hombres jóvenes reclutas– y civiles en la zona de conflicto, como en la reciente crisis de abril de 2016. La nueva legislación llega en una etapa de incremento de la tensión entre Armenia y Azerbaiyán y –según el Ministerio de Defensa armenio– de necesidad de desarrollar las Fuerzas Armadas acorde con el contexto. Según el Ministerio, las prórrogas educativas se habían convertido en una vía para no realizar el servicio militar. La nueva ley fue rubricada el 29 de noviembre por el presidente armenio.

- OC Media, [Army or education? Young men in Armenia face a dilemma](#), 18/12/17
- RFE/RL, [Armenian Lawmakers Adopt Controversial Military-Service Bill](#), 15/11/17

ISRAEL – PALESTINA

Un nuevo informe de diversas organizaciones palestinas y WILPF alerta sobre los impactos de género de la ocupación. El documento *Palestinian Women Under Prolonged Israeli Occupation: The Gendered Impact of Occupation Violence* destaca que las mujeres palestinas enfrentan de manera regular violencia, intimidaciones, amenazas, castigos colectivos y discriminaciones como resultado de prácticas implementadas por las autoridades israelíes que contravienen el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Entre ellas detalla las consecuencias de las redadas nocturnas y también de las restricciones de movimiento y del bloqueo a Gaza, que influyen en el acceso a infraestructuras de salud o a servicios de ayuda en casos de víctimas de violencias de género. Asimismo, el informe hace referencia a testimonios sobre la violencia que padecen mujeres y niñas y niños palestinos por parte de colonos israelíes y analiza las consecuencias de la expulsión de población palestina de Jerusalén. Respecto a esto último, muchas mujeres palestinas viven con temor ante la posibilidad de que el permiso de residencia de ellas y de integrantes de sus familias sean revocados por las autoridades israelíes, impidiéndoles continuar su vida en la ciudad. Más aun, las que residen en Jerusalén sin los permisos vigentes no pueden visitar a sus familias en Cisjordania o Gaza y, en casos de divorcio, las mujeres palestinas pueden perder el permiso de residencia en Jerusalén y no tener la posibilidad de visitar a sus hijos e hijas si éstos continúan viviendo en la ciudad. El informe también destaca el impacto de las demoliciones de viviendas y de las amenazas de destrucción de propiedades palestinas –producto de una política de permisos de construcción discriminatoria hacia la población palestina–, que tiene graves consecuencias psicológicas, económicas y sociales, además de dejar a

muchas mujeres y sus familias sin hogar y/o en condiciones de hacinamiento. Asimismo, según el informe, la preocupación por las políticas israelíes en los territorios ocupados palestinos también incluye el tratamiento a defensores de derechos humanos, incluyendo defensoras de los derechos de las mujeres, objeto de amenazas y ataques. Mujeres palestinas activistas y periodistas también son objeto de redadas nocturnas, arrestos y otras acciones punitivas por sus críticas a la ocupación israelí. El informe ha sido elaborado con motivo del análisis del dossier israelí y de los territorios ocupados palestinos en el marco de la revisión periódica universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que corresponde a principios de 2018. Los impactos recogidos en el informe se pusieron de nuevo de manifiesto a través del caso de Ahd Tamimi. A finales de año, las autoridades israelíes arrestaron y presentaron cargos contra la joven palestina, de 16 años, después de que durante diciembre se hiciera viral un video en el que la adolescente confronta a una pareja de soldados israelíes en la localidad de Nabi Saleh, en los territorios ocupados palestinos. Tamimi es considerada símbolo de una generación –la segunda generación en el caso de su familia– que ha crecido bajo el régimen de ocupación israelí con todo lo que ello implica en términos de militarización cotidiana, controles, restricción de movimientos, humillaciones, arrestos, destrucción de viviendas, entre otras situaciones. Su detención se produce en un periodo de incremento de tensión en la zona tras la decisión del presidente estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital de Israel (prueba de ello es que entre el 6 y el 19 de diciembre las autoridades israelíes habían detenido a 77 palestinos y palestinas menores de 18 años, el doble que el mes anterior).

- WILPF, [Report release: Palestinian Women Under Prolonged Israeli Occupation: The Gendered Impact of Occupation Violence](#), 1/11/17
- BBC, [“Palestinian girl charged after slapping soldier on video”](#), BBC, 1/1/2018
- Harriet Sherwood, [“Palestinian 16-year-old Ahd Tamimi is the latest child victim of Israel's occupation”](#), *The Guardian*, 2/1/2018
- Tessa Fox, [“Israeli arrests of Palestinian children rise after Trump's Jerusalem announcement”](#), Al-Monitor, 2/2/18
- Ahmad Melhem, [“How Ahd Tamimi became an icon to Palestinians”](#), al-Monitor, 5/1/18

KENYA

La organización internacional Human Rights Watch ha publicado en diciembre un informe en el que detalla los actos de abusos y violencia sexual y otras graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el reciente ciclo electoral celebrado en Kenya entre agosto y noviembre y los impactos de género que han supuesto. HRW determinó que el Gobierno fracasó en la prevención de la violencia sexual relacionada con el proceso electoral, al no investigar los casos, conducir ante la justicia a

los responsables y garantizar a las víctimas el cuidado y la atención necesaria. Además, HRW ha señalado que según los testimonios, muchos de los responsables de los ataques sexuales fueron miembros de los cuerpos de seguridad. En paralelo, la organización local Kenyan National Commission on Human Rights (KNCHR) publicó un informe el 20 de diciembre en el que analizaba los acontecimientos ocurridos durante el periodo electoral entre agosto y noviembre de 2017, en el que documentaba la

muerte de 92 personas como consecuencia de los enfrentamientos entre simpatizantes de los partidos políticos y por la actuación policial, y por otro lado también constató la existencia de un mínimo de 86 casos documentados de violencia sexual y de género (SGBV) durante el periodo electoral contra hombres y mujeres, solo teniendo en cuenta el condado de Nairobi City, por lo que las cifras

podrían ser muy superiores. Los perpetradores habían sido civiles y miembros del cuerpo de Policía. Debido a la magnitud de las violaciones, la Comisión ha iniciado una investigación más amplia en diversas regiones de todo el país y lanzará en los próximos meses un nuevo informe con el resultado de estas investigaciones.

- Human Rights Watch, [They Were Men in Uniform': Sexual Violence against Women and Girls in Kenya's 2017 Elections](#), 14/12/17
- Kenyan National Commission on Human Rights, [Still a Mirage: A Human Rights Account of the Fresh Presidential Poll for the Period September and November 2017](#), 20/12/17

MYANMAR

Diferentes organizaciones de derechos humanos denunciaron la utilización de la violencia sexual contra mujeres y niñas rohingyas en Myanmar durante la operación militar de las fuerzas de seguridad después de los atentados por parte del grupo armado de oposición. Más de 600.000 personas rohingyas tuvieron que desplazarse de manera forzada como consecuencia de la violencia armada. La organización Human Rights Watch (HRW) publicó un informe, "All of My Body Was Pain", en el que documenta la violación colectiva de mujeres y niñas rohingyas por parte de las Fuerzas Armadas en el marco de una campaña de limpieza étnica contra esta población. HRW entrevistó a más de 50 mujeres refugiadas en Bangladesh que habían huido de la violencia, entre las que había cerca de 30 supervivientes de violencia sexual, que denunciaron las violaciones cometidas por soldados birmanos durante los ataques contra poblaciones. Además, denunciaron que civiles de la etnia rakhine también acosaron sexualmente a mujeres rohingyas. HRW señala que la práctica totalidad de las agresiones sexuales documentadas son

violaciones colectivas y que cientos de mujeres habrían sido víctimas. Esta organización ya había documentado actos de violencia sexual durante anteriores operaciones militares en el estado Rakhine, aunque estas acusaciones habían sido rechazadas por las autoridades birmanas, que nunca investigaron lo sucedido ni persiguieron a los culpables. Por otra parte, la representante especial de la ONU para la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, viajó a Bangladesh para visitar los campos que acogen a la población refugiada rohingya procedente de Myanmar y denunció que se habían producido múltiples agresiones sexuales incluyendo violaciones, violaciones colectivas, desnudos forzados, humillaciones y esclavitud sexual por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas de Myanmar contra la población civil rohingya. La representante de la ONU señaló que la violencia sexual había sido comandada, orquestada y perpetrada por las Fuerzas Armadas y había involucrado a otros actores, como la policía fronteriza y las milicias integradas por población rakhine y de otras etnias.

- UN News, [UN envoy urges greater support for Rohingya victims of sexual violence](#), UN News, 16/11/17
- HRW, [Burma: Widespread Rape of Rohingya Women, Girls](#), HRW, 16/11/17

Construcción de paz

KOSOVO

Un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI) celebra el inicio en enero de 2018 del periodo de acceso a reparaciones económicas para mujeres y hombres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en Kosovo, si bien alerta sobre las limitaciones significativas y retos pendientes en justicia transicional en relación a dicha violencia y señala las responsabilidades internacionales y locales en ese déficit, instando a la UE y al Gobierno de Kosovo, entre otros, a adoptar medidas concretas al respecto. Por una

parte, AI subraya las limitaciones de la legislación sobre reparación. Entre ellas, la falta de provisiones de acceso gratuito o asequible a asistencia sanitaria —contemplada en cambio para otras víctimas civiles de la guerra—, asistencia psicológica y psicosocial, así como de empoderamiento económico y acceso a empleo. En cambio, la reparación está mayoritariamente centrada en una compensación económica mensual, que en todo caso es considerada por AI como justa y digna, alineada con el derecho internacio-

nal y percibida por muchas supervivientes como un medio de recuperación de la autoestima y autonomía. No obstante, la legislación limita el acceso a esta compensación a víctimas de violencia sexual cometida hasta junio de 1999, lo que excluye a víctimas de la violencia sexual perpetrada en la fase inmediatamente posterior al conflicto, en su mayoría mujeres de minorías étnicas de Kosovo (serbias, romaníes) y algunas mujeres albanokosovares, a manos del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK). Además, limita a cinco años el periodo para solicitar las compensaciones.

El informe señala también otros obstáculos para el acceso a la reparación, incluyendo relativos al estigma. Por ello, AI insta a medidas de reparación integral y transformativa, incluyendo medidas de justicia restaurativa, de fortalecimiento del sistema judicial y de fin de la impunidad. En ese sentido, AI subraya que pese al carácter extendido y sistémico de la violencia sexual en el conflicto armado en Kosovo, solo unos pocos responsables han sido procesados. El informe documenta también los fracasos de la UNMIK y EULEX en ese ámbito.

- Amnistía Internacional, [Wounds that Burn our Souls. Compensation for Kosovo's Wartime Rape Survivors, but still no Justice](#), AI, 2017

MALÍ

En lo que respecta a las iniciativas de construcción de paz en Malí, cabe destacar la presentación de la red de mujeres malienses por la resolución 1325 (Malian Women's Network for Security Council Resolution 1325), en noviembre en Bamako, con la colaboración de SIPRI y otras organizaciones de la sociedad civil. La red reunió a mujeres representantes de las 10 regiones del país que aportaron sus testimonios sobre los impactos de género del conflicto armado, así como sobre el papel de las mujeres en la construcción de paz en el país. Las mujeres destacaron la importancia de abordar la violencia de género a nivel local. Por otra parte, varios análisis destacaron la limitada participación de las mujeres en el proceso de paz en Malí a pesar de las reivindicaciones planteadas por las organizaciones locales de mujeres, así como del compromiso

de la comunidad internacional con la implementación de la agenda sobre género, paz y seguridad, en unas negociaciones facilitadas por diferentes actores internacionales. Las mujeres inicialmente exigieron la inclusión en las negociaciones de paz y tras la firma del acuerdo de Bamako, las reivindicaciones se centraron en la participación en los diferentes mecanismos de implementación del acuerdo. Cabe destacar además, que en el año 2015 se aprobó el segundo Plan de Acción Nacional sobre la resolución 1325 para el periodo 2015-2017, aunque el plan carece de la suficiente financiación y de una coordinación eficiente. No obstante, el proceso de paz se llevó a cabo en un contexto de fuerte masculinización y militarización, lo que dificultó enormemente la inclusión de la perspectiva de género y la participación de las mujeres pese a su movilización activa.

- SIPRI, [SIPRI launches landmark Malian Women's Network in Bamako](#), SIPRI 7/12/2017
- Jenny Lorentzen, [Women and the Peace Process in Mali](#), PRIO, 2017
- Pamela Urrutia, María Villellas and Ana Villellas, [The Role of the EU and Other Third Parties in Promoting the Gender, Peace and Security Agenda in Mediation and Dialogue Processes](#), WOSCAP, 2017.

REDES DE MUJERES MEDIADORAS

La Unión Africana presentó una nueva red de mujeres implicadas en la prevención de conflictos y la mediación, llamada "FemWise-Africa", con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en los procesos de paz y promover su participación en éstos. Esta red se integrará en la Arquitectura de Paz y Seguridad Africana de la UA y estará copresidida por las dirigentes africanas Catherine Samba Panza, antigua presidenta de la RCA y Speciosa Wandira, ex vicepresidenta de Uganda. Además, el Gobierno de Italia presentó también la Red de Mujeres Mediadoras del Mediterráneo, integrada por mujeres de países de la región Mediterránea mediadoras o expertas en mediación.

Estas redes de mujeres mediadoras se unen a otras redes similares ya existentes como la red nórdica de mujeres mediadoras, integrada por mediadoras de Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca que a su vez cuentan con redes nacionales, y también a red de mujeres mediadoras promovida por el Gobierno de Sudáfrica. A su vez, el Gobierno de Reino Unido anunció la creación de una red de mujeres mediadoras en el ámbito de la Commonwealth. Estas redes han sido identificadas como una buena práctica para promover la participación de las mujeres en los procesos de paz e reforzar el intercambio de conocimientos y el empoderamiento de las mujeres mediadoras.

- J. Hansen, K. Lund, L. Mitchell, H. Salvesen, R. Sandberg, E. Slåtsum y T. Tryggstad, ["No backsliding" on Women's Inclusion in Peace Mediation](#), PRIO, Octubre 2017
- [Mediterranean Women Mediators Network](#)

1325

PLANES DE ACCIÓN NACIONAL

Los Planes de Acción Nacional continuaron siendo una de las principales herramientas para la implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad y de las subsiguientes resoluciones en esta materia. Durante el año 2017 ocho países aprobaron un nuevo plan de acción (República Checa, Montenegro, Brasil, Palestina, Islas Solomon, Camerún, Guatemala y El Salvador), lo que eleva el número total de estados miembros de la ONU con un Plan de Acción Nacional aprobado a 72. Además, al menos siete países actualizaron sus planes con nuevas versiones (Alemania, Serbia, Nigeria, Bélgica, Filipinas, Canadá y España). Así pues, de forma lenta pero progre-

- [Peace Women](#)

UNIÓN EUROPEA

El Comité Político y de Seguridad (CPS) de la UE aprobó en diciembre de 2017 el “Tercer Informe sobre los Indicadores de la UE sobre el Enfoque Integrado para la Implementación de la UE de las Resoluciones 1325 y 1820 sobre mujeres, paz y seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU”. El informe recopila datos aportados por los Estados miembro de la UE sobre la implementación de compromisos de la UE con la agenda de mujeres, paz y seguridad durante el periodo enero de 2013 y diciembre de 2015, en base a los indicadores de la UE, aprobados en 2010 y actualizados en 2016. Pese a que –según el informe anterior (periodo 2010-2012)–, una de las áreas de prioridad de este nuevo informe había de ser la participación de mujeres en procesos de paz, este nuevo informe admite que la recopilación de datos llevada a cabo no permite una evaluación sustantiva sobre el grado de apoyo de la UE a la participación de mujeres en procesos de paz. Del informe se desprende la falta de sistematización de información por la UE y sus Estados miembro sobre los indicadores y sub-indicadores de la UE en materia de mujeres y procesos de paz (indicadores 11 a 14, sub-indicadores 11.1, 12.1, 13.1. y 14.1.), así como el foco mayoritariamente anecdótico del seguimiento a estos indicadores. Por otra parte, el informe también identifica como reto

siva, los Estados van creando herramientas nacionales para poner en práctica los compromisos adquiridos con la agenda sobre género, paz y seguridad. No obstante, la financiación de esta agenda continuó siendo el principal reto y la muestra de que el compromiso de la mayoría de Gobiernos es retórico más que real. Solamente el 30% de los planes de acción cuenta con un presupuesto específico para su aplicación, lo que pone en serio riesgo la implementación de todos aquellos que no cuentan con un compromiso financiero gubernamental. Por otra parte, cabe destacar que 13 de los conflictos armados activos transcurren en países que cuentan con un Plan de Acción Nacional sobre la 1325 vigente.

el estancamiento en cuanto a la proporción de mujeres jefas de Delegación (22,8% en 2013, el 22,1% en 2014 y 19,5% en 2015). El informe destaca la ventana de oportunidad abierta para el periodo 2017-2019, dado el elevado número de jefas de Delegación que acabarán su mandato en esos años. La proporción de mujeres entre el personal senior del Servicio Europeo de Acción Exterior fue aún más limitada (13,8% en 2013; 10% en 2014; y 13,6% en 2015). Por otra parte, en relación a cargos de género en las misiones civiles de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE, en el primer trimestre de 2017 el 44% de esas misiones tenía una persona asesora de género a tiempo completo, el 33% una asesora de género con doble función, y el 22% tenía punto(s) focal(es) de género. En lo que respecta a las misiones militares, el 50% tenía una persona asesora de género de dedicación exclusiva o con doble función y el 50% tenía punto(s) focal(es) de género. Asimismo, el informe señala el margen de maniobra existente para una mayor integración de la perspectiva de género en los mandatos y documentos de planificación y rendición de cuentas. Entre las líneas de futuro, el informe señala la futura conclusión de la revisión del Enfoque Integrado de la UE y la presentación de resultados al CPS, aunque sin calendario concreto.

- Council of the European Union, [Third Report on the EU Indicators for the Comprehensive Approach to the EU Implementation of the UN Security Council Resolutions 1325 and 1820 on Women, Peace and Security](#), 22/11/17

DEBATE ABIERTO SOBRE MUJERES, PAZ Y SEGURIDAD

En el mes de octubre se celebró el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad, con la participación de Estados miembros, Naciones Unidas, así como de representantes de la sociedad civil. El Secretario General presentó su informe anual de evaluación de la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad, integrada por ocho resoluciones del Consejo de Seguridad sobre esta materia – 1325 (2000); 1820 (2009); 1888 (2009); 1889 (2010); 1960 (2011); 2106 (2013); 2122 (2013) y 2242 (2015)–. El informe constató nuevamente las enormes carencias en la implementación de la agenda, que dista mucho de acercarse a los compromisos adquiridos a lo largo de los últimos 17 años desde que se aprobó la resolución 1325 en el año 2000. El secretario general de la ONU evaluó las iniciativas y avances en las siguientes áreas: a) la participación y el liderazgo de las mujeres en las iniciativas de paz y seguridad; b) la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas durante los conflictos y después de ellos; c) la planificación con perspectiva de género y la rendición de cuentas; d) el fortalecimiento de la arquitectura de género y los conocimientos técnicos; y e) la financiación de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad. Además, el secretario general destacó que desde su acceso al cargo había impulsado que uno de los pilares centrales de la prevención de conflictos, tema que durante 2017 fue especial objeto de atención, fuera la igualdad de género a través de acciones efectivas en los ámbitos anteriormente mencionados. Sin embargo en la evaluación concreta de los progresos, el propio informe recoge la fragilidad de los avances e incluso constata algunos retrocesos.

Así pues, en el ámbito de la participación, por ejemplo, se constató que durante el año 2016 se produjo un retroceso en la participación de las mujeres en los procesos de paz puesto que el informe recoge que “de los nueve procesos a los que se hizo un seguimiento, había mujeres en puestos de categoría superior en 11 delegaciones, en comparación con 8 procesos y 12 delegaciones en 2015 y 9 procesos y 17 delegaciones en 2014”. Y en lo que respecta a las demandas de asesoramiento especializado sobre igualdad de género en las negociaciones de paz, éstas se redujeron y sólo tuvieron lugar en cuatro de los siete (57%) procesos de mediación dirigidos o co-dirigidos por la ONU, lo que representa una reducción con respecto a años anteriores en los que se registraron solicitudes en el 89% de los procesos en 2015, el 67% en 2014 y el 88% en 2013. También se constató un retroceso con respecto a la participación del conjunto de la sociedad civil, ya que si bien en 2014 y 2015 se llevaron a cabo consultas en el 100% de los procesos en los que intervenía Naciones Unidas, en 2016 se llevaron a cabo consultas en el 86% de los procesos. Además, también se redujo el número de acuerdos de paz que incluyó cuestiones de género en su redactado, pasando del 70% en 2015 al 50% en 2016. Así pues, después de varios años de tendencia positiva, se constatan retrocesos que evidencian la falta de sostenibilidad de los avances logrados. De hecho, el propio Estudio Global de Naciones Unidas de evaluación de 15 años de implementación de la agenda ya apuntaba a que el ámbito de la participación y el liderazgo de las mujeres era uno de los ámbitos en el que persistían mayores retos.

En lo que respecta a la protección de los derechos de las mujeres, el informe se hizo eco de los 19 contextos de preocupación y los 46 actores en conflicto sobre los que pesan acusaciones creíbles de ser responsables de actos de violencia sexual en el marco de conflictos armados. Además, se recogieron 145 nuevas denuncias de abuso y explotación sexual por parte de personal de Naciones Unidas, la mayoría de las cuales estuvieron dirigidas contra personal de operaciones de mantenimiento de la paz. El informe también constata preocupación por la creciente participación de mujeres en organizaciones acusadas de terrorismo, señalando que las mujeres podrían constituir entre el 20 y 30% de las combatientes extranjeras de estos grupos. Además, en el caso de grupos como Boko Haram, casi uno de cada cinco atacantes suicidas es menor de edad y tres cuartas partes de éstos son niñas. Otro de los principales retos pendientes continúa siendo la financiación de la agenda, que según constata el secretario general en el informe es insuficiente y está lejos de las cifras óptimas, ya que Naciones Unidas recomienda que el 15% de los fondos destinados a la construcción de la paz esté específicamente dedicados a acciones de promoción de la igualdad de género. Solo 12 planes de acción nacional cuentan con presupuesto específico.

En lo que respecta a la celebración del debate, cabe destacar las acciones de incidencia llevadas a cabo por las organizaciones de mujeres para lograr un mayor compromiso por parte de los Estados miembros con la participación activa de la sociedad civil y la protección de las mujeres defensoras de los derechos humanos, así como una mayor vinculación de la agenda mujeres, paz y seguridad con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, destacaron la importancia de redoblar los esfuerzos para promover el desarme. Y se hicieron llamamientos para garantizar que las políticas antiterroristas, incluyendo en el ámbito financiero,

no impidan o restrinjan el trabajo de las organizaciones de mujeres. Desde la sociedad civil se denunció que la implementación de la agenda de mujeres, paz y seguridad continúa siendo fragmentaria. En el contexto de preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil por los recortes en 2017 de las funciones de género en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU (incluyendo en cuanto a número de posiciones de género y grado de experiencia requerido para el cargo), las organizaciones de mujeres llamaron a los Estados a no permitir la reducción de provisiones de género en los mandatos ni en los presupuestos de la agenda de mujeres, paz y seguridad. Las intervenciones por parte de los Estados estuvieron centradas especialmente en dos ámbitos: la participación de las mujeres en la prevención, la mediación y la construcción y mantenimiento de la paz; y la protección frente a la violencia sexual y de género en los conflictos armados.

- NGOWGWPS, [Open Letter to Permanent Representatives to the UN: Recommendations on the Security Council Open Debate on Women, Peace and Security \(WPS\)](#), Octubre 2017
- Secretario General de la ONU, [Informe del Secretario General sobre las mujeres y la paz y la seguridad](#), S/2017/861, 16/10/17

Género y Paz es una publicación trimestral de la Escola de Cultura de Pau con información y análisis sobre conflictividad y construcción de paz con perspectiva de género.

La Escola de Cultura de Pau (ECP) es una institución académica de investigación para la paz ubicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue creada en 1999 con el objetivo de promover la cultura de paz a través de actividades de investigación, diplomacia paralela, formación y sensibilización. Sus principales ámbitos de trabajo incluyen el análisis de conflictos, procesos de paz, género, derechos humanos y justicia transicional y la educación para la paz.

Para recibir esta publicación y otras informaciones sobre género y paz puedes suscribirte [aquí](#).
Puedes leer nuestras publicaciones en <http://escolapau.uab.cat>
Síguenos en [Facebook](#) y [Twitter](#)

Esta publicación se ha elaborado con el apoyo de :

Escola de Cultura de Pau

Edifici MRA (Mòdul Recerca A)
Campus de la UAB - 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) Barcelona, España
Tel.: +34 93 586 88 48 / Fax: +34 93 581 32 94
pr.conflictes.escolapau@uab.cat
<http://escolapau.uab.cat>



**Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament**



**Generalitat
de Catalunya**

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja necesariamente la opinión de la ACCD